



Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

ACTORA:

[REDACTED]  
[REDACTED]

DEMANDADOS: SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO  
DE JALISCO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE  
JALISCO

MAGISTRADO: JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL

ADO:

SECRETARIO: JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN

RIO:

Guadalajara, Jalisco, 9 nueve de octubre de 2020 dos mil veinte.

**V I S T O S** para resolver en **Sentencia Definitiva** los autos del Juicio Administrativo cuyo número de expediente se indica al rubro, promovido por [REDACTED], por conducto de su Administrador General Único [REDACTED] en contra de la **SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**, así como de la **SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, y;

### R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito presentado el 6 seis de julio de 2020 dos mil veinte, a través de la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, suscrito por suscrito por **Benjamín Moreno Jiménez**, Administrador General Único de “[REDACTED]” carácter que acredita con las copias certificadas de la escritura pública número 9,968, pasada ante la fe del Notario Público número 103, de San Miguel El Alto, Jalisco, quien a su vez es propietaria del vehículo con placas de circulación JV54608, por su propio derecho promovió Juicio en Materia Administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se desprendieron.

2. Por auto de 3 tres de agosto de 2020 dos mil veinte, se admitió la demanda, teniéndose como autoridades demandadas a la Secretaría del Transporte y a la Secretaría de Seguridad; y como acto administrativo impugnado las cédulas de

notificación de infracción folios **113|272181764**, **113|274386185**, **113|277214482**, **113|297250736** y **113|277743795**, emitidas por personal de la Secretaría del Transporte y de la Secretaría de Seguridad.

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas las documentales, así como la presuncional legal y humana, señaladas en el capítulo respectivo de su escrito inicial de demanda, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y de los documentos anexos a la misma se ordenó correr traslado a la autoridad demandada para que dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación produjeran contestación a la demanda, ofrecieran y exhibieran pruebas apercibiéndoles que en caso de no hacerlo así, se les tendrían como ciertos los hechos que no fueran contestados salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados, así mismo se les declararían por perdido el derecho a ofrecer pruebas.

También se requirió a las autoridades demandadas, para que al momento de producir contestación a la demanda, exhibiera copias certificadas de los actos administrativos impugnados, apercibidas que en caso de no hacerlo así, se le aplicaría cualquiera de las medidas de apremio de las previstas en el artículo 10, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; sin perjuicio de tener por ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con esos documentos; sin que al efecto hayan cumplido con dicha determinación, razón por la cual en el proveído de 30 treinta de septiembre del 2020 dos mil veinte, se dio cuenta que no cumplieron con dicho requerimiento, en consecuencia se les hizo efectivo el citado apercibimiento y se **presumieron como ciertos los hechos** que la parte actora pretende acreditar con las documentales consistentes en las copias certificadas de la cédula de notificación de infracción controvertida, salvo disposición en contrario; tal como se desprende de la actuación que se encuentra glosada a las presentes actuaciones (fojas 32).

**3.** Con fecha 30 treinta de septiembre del 2020 dos mil veinte, se tuvo al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad, quien compareció por si y en representación y sustitución de la autoridad demandada, -Secretaría de Seguridad-, produciendo contestación a la demanda, por opuestas las excepciones y defensas que de su escrito se desprendieron, se admitieron las pruebas ofrecidas



**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

teniéndose por desahogadas, de la primer autoridad en cita la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, del segundo, las documentales marcadas con el número 1, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, mismas que se tuvieron por desahogadas; en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Por lo anterior y en razón de que las pruebas admitidas, se habían desahogado en su totalidad, y que lo controvertido involucra cuestiones puramente de derecho, se otorgó a las partes un término común de tres días a fin de que formularan alegatos, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo así, se les tendría por perdido el derecho en ese sentido y se turnarían los autos para que se dictara la sentencia definitiva que en derecho correspondiera.

4. Sin que al efecto las partes hubieran comparecido a expresar alegatos dentro del término que para tal efecto les fue concedido, en el último párrafo del acuerdo establecido en el punto que antecede, en consecuencia se les hacen efectivos los apercibimientos contenidos en el párrafo que antecede y se les **declara** por perdido el derecho a rendir alegatos, ordenándose turnar los autos para que se dictara la Sentencia Definitiva que en derecho correspondiera, la cual hoy se pronuncia de conformidad a los siguientes:

## C O N S I D E R A N D O S

I. Este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia con base en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 3, 4, 5 y 10, y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentra debidamente acreditada en actuaciones con la documental que obra agregada a foja 5, a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 48<sup>1</sup>, 57<sup>2</sup> y

<sup>1</sup> Artículo 48. En los juicios a que se refiere esta ley será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos, las contrarias a la moral y al derecho; y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento administrativo, salvo que en éste no se le hubiera dado oportunidad razonable de hacerlo.

58<sup>3</sup> de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los diversos numerales 399<sup>4</sup> y 400<sup>5</sup> del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la Materia.

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciere valer la parte accionante en su escrito inicial de demanda; toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; se sustenta lo anterior por analogía y para mayor claridad se transcribe la siguiente Jurisprudencia:

**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** *De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la*

---

*Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de citación para sentencia. En este caso, la Sala ordenará dar vista a la contraparte para que en el término de cinco días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su admisión y valoración hasta la sentencia definitiva.*

<sup>2</sup> Artículo 57. El ofrecimiento y desahogo de pruebas, salvo lo expresamente previsto en la presente ley, se regirá por las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

<sup>3</sup> Artículo 58. La valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

<sup>4</sup> Artículo 399.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del coligante, salvo siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.

<sup>5</sup> Artículo 400.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba.



**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

*litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” (Novena Época. Instancia. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXI, Mayo de 2010. Tesis: 2a./J.58/2010. Página: 830).*

**IV.** Antes de entrar al estudio de los conceptos de nulidad realizados por la parte actora, en primer término y por ser de orden público se estudia la causal de improcedencia, promovida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad, en su escrito de contestación a la demanda recepcionados por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el 7 siete de septiembre de 2020 dos mil veinte, prevista por el artículo 29, fracción IX, en relación con el numeral 3 fracción II, inciso a) y el numeral 30, fracción I<sup>6</sup> de la Ley de Justicia Administrativa que literalmente establece:

**“Artículo 29.-** Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos:

**XI.** En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.”

Refiere el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad, que no le reviste el carácter de autoridad demandada, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3, fracción II, inciso a), de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en el cual se establece que es autoridad demandada la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la resolución o tramite el procedimiento impugnado o que la sustituya legalmente, y en la especie el referido, no dictó, ni ordenó, ni ejecutó, ni trato de

<sup>6</sup> Artículo 30. Procede el sobreseimiento del juicio:

I. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

ejecutar los actos impugnados, tal y como se desprende de los folios de foto infracción 272181764, 274386185, 277214482, 297250736 y 277743795, señalados en la propia demanda como actos reclamados.

Al respecto, se **desestima** la causal de improcedencia aducida, lo anterior toda vez que, mediante publicación realizada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, de fecha 31 treinta y uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve se publicó el acuerdo DIGELAG ACU 063/2019, expedido por el GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, que contiene el Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con el cual se le dio el carácter de autoridad al asumir funciones hasta entonces encomendadas a la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por el inciso a), fracción II, del artículo 3<sup>7</sup>, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, lo anterior, si se toma en consideración que tiene a su cargo el Registro de Adeudo Vehicular.

V. Resulta **procedente** el concepto de **nulidad** expresado por la parte actora “**[REDACTED]**”, por conducto de su Administrador General Único **[REDACTED]** contenido en el presente considerando, por lo que de conformidad a lo dispuesto por la fracción II de los artículos 74<sup>8</sup> y 75<sup>9</sup> de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede **declarar** la **nulidad** de las cédulas de notificación de infracción folios **113|272181764, 113|274386185, 113|277214482, 113|297250736 y 113|277743795** emitidos por la Secretaría del Transporte y Secretaria de Seguridad, impuestas al vehículo con placas de circulación **[REDACTED]**.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la normatividad invocada en el párrafo que antecede, se procede al examen de las causas de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución combatida y más benéfica para la parte accionante, atento al citado dispositivo legal así como a la tesis que aquí se inserta:

**“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE  
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN**

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> “Artículo 74. La sentencia definitiva podrá:

I. ...;  
II. Declarar la nulidad de la resolución o acto combatido;”

<sup>9</sup> “Artículo 75. Serán causas de anulación de una resolución, de un acto o de un procedimiento administrativo:

I. ...  
II. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o se dejaron de aplicar las debidas;



Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

**ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR.** *En el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos". (Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Tesis: VIII.1o.86 A. Página: 1828)*

En atención a los numerales y Jurisprudencia señalada, se procede al análisis de la lectura integral que vierte en su escrito inicial de demanda, en el que de manera sustancial refiere que las cédulas de notificación de infracción no le fueron debidamente notificadas, situación que estima suficiente para que se declare su nulidad.

Al manifestarse a lo anterior, el Director General Jurídico de la autoridad demandada, -Secretaría de Seguridad-, en su escrito de contestación de

demanda recepcionado por la Oficialía de Partes el 7 siete de septiembre de 2020 dos mil veinte, (fojas 21 - 25), manifiesta que de las cédulas de notificación de infracción se desprende que los conceptos devienen por motivo de la aplicación de sanciones por comisión de infracciones (FOTOINFRACCIONES) anteriores al 19 diecinueve de octubre de 2019 dos mil diecinueve, actos que tampoco le competen al suscrito, puesto que tal función la realizó la Secretaría del Transporte, ya que sus facultades se establecieron oportunamente, en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; por lo que resulta evidente que si el promovente es sorprendido violentando la Ley este puede ser sancionado en los términos de la misma.

Derivado de los argumentos establecidos en párrafos anteriores, se considera que le asiste la razón a la parte accionante cuando refiere que la infracción impugnada, violenta las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no le fueron debidamente notificadas, no obstante que la autoridad demandada se encuentra obligada a ello de conformidad a lo dispuesto por los artículos 377, así como por la fracción III, del artículo 378, del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en los cuales se establece que en caso de que el conductor no se encuentre en el lugar del vehículo, el agente vial procederá a elaborar la cédula de notificación correspondiente y la dejará en un lugar visible y seguro del vehículo, con independencia de los motivos que hayan generado el levantamiento de la misma, así como aquella que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en la cédula de notificación de infracción, así como que la misma deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores a su levantamiento, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado.

También se precisa en el dispositivo legal citado en último lugar, que en el caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo reciba o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello; además el actor refiere que hasta el momento de la presentación de la demanda desconocía su contenido, tan es así que solicitó se requiriera a las autoridades demandadas para que los exhibiera y así estar en posibilidad de ampliar su demanda; sin embargo en auto de 30 treinta de septiembre de 2020 dos mil veinte, se dio cuenta que la Secretaría del Transporte y la Secretaría de Seguridad, fueron omisas en remitir las copias certificadas de las cédulas de notificación de





infracción controvertidas, por lo que se tuvieron como ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con esa documental, de ahí se desprende que se ha excedido en demasía el término de los sesenta días naturales que tenía para notificar la misma; quedando de manifiesto para esta autoridad que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, al no haber sido legal y debidamente notificada, toda vez que constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración pública, por lo que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de legalidad y seguridad jurídica resguardadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia **declarar la nulidad** de las cédulas de notificación de infracción impugnadas, sustenta lo anterior el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:

**“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.** *La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”*

Así entonces, aun cuando se trata de una omisión formal, debe declararse la nulidad lisa y llana, en virtud de que la ausencia de notificar

personalmente al actor, no es sujeta de redimirse, ya que los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos impugnados ocurrieron en forma accidental con anterioridad, de manera que no pueden reincorporarse a la actualidad y por tanto, tampoco pueden servir de base para imponer nuevamente la sanción, dada la imposibilidad física y material de repetir esos sucesos y notificarlos de manera personal al infractor.

Bajo las argumentaciones vertidas, se considera innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de anulación y pruebas aportadas al sumario que hacen valer las partes, porque su estudio sería innecesario al no influir en la variación del sentido de esta resolución, en términos del criterio Jurisprudencial consultable con el número de registro 172,578, Novena Época, página 1743, Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de Mayo de 2007 que dice:

***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos de violación tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de los restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido del fallo.”***

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 72, 73, 74, 75, 76, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente controversia, de conformidad con los siguientes:

#### **R E S O L U T I V O S**



*legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”.*